

ha hecho mas que cumplir con su deber al exigir su pago, y proceder al aseguramiento de los intereses fiscales, sin violar en nada las garantías constitucionales invocadas por los quejosos. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: Primero: que es revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Matamoros en 20 de Agosto proximo pasado, que declaró: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores H. Nielsou, Casimiro Castro, Melchor M. Abascal, M. H. Croos, Manuel Rodriguez, Luis Vazcaya y Compania y Luanó Bareda, contra los autos del administrador de la Aduana marítima de dicho puerto, que los aseguró efectos y les exigió el pago de derechos de bultos mencionado. Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los mismos Señores, contra dichos actos, por no haberse violado con estos, las garantías de los artículos constitucionales que invocan los quejosos.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que los elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archíveze á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Ilanla*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 24 de 1878.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Ramon O. Feliú, como apoderado del Señor su padre D. Hermenegildo Feliú, contra el decreto número 172 de la Legislatura de ese Estado, en la parte que establece el cobro de alcabalas sobre los efectos del país que se introduzcan al referido Estado de Querétaro.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que la cuestion sometida al fallo de V. es meramente de derecho; pues se reduce á saber si pugna ó no con la letra de la Constitucion, el decreto número 72 de la Legislatura de Querétaro, que previene se continúe cobrando el impuesto conocido bajo el nombre de alcabala,

Desde luego salta á la vista, que por el artículo 124 de dicha Constitucion, se ha mandado lo siguiente: "Para el día 1º de Junio de 1858, quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la República." El 126 dice: "Esta Constitucion las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la República con aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados."

Como para exigir á Don Hermenegildo Feliú el pago de alcabala, no puede haber autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento que se tenga que iniciar, por estar prohibido ese pago como se ha visto, es claro que no puede hacerse efectivo sin abierta violacion de la garantía reconocida por el artículo 16: Y sien-

do de la competencia de los tribunales de la Federacion resolver toda controversia que se suscite, por las leyes ó actos de cualquiera autoridad, que viole las garantías individuales, es inegable la de este Juzgado en el caso presente, para decidirlo por la vía de amparo (artículo 101 de la Constitución y ley de 20 de Enero de 1869.)

Estudiada nuestra Constitución, se descubre desde luego en ella el espíritu de imponer ciertas reglas fundamentales, obligatorias no solamente para los ciudadanos, sino tambien para los poderes Ejecutivo y Judicial, para las Legislaturas y el mismo Congreso de la Union; pudiendo decirse con propiedad, que ella ha atado las manos de los Legisladores, sujetándoles á trabas que los imposibilitan para variarla ó destruirla. Así es como entre nosotros no existe mas poder soberano que el del pueblo, reglamentado por la Constitución (artículos 39 y 41.) Educados bajo del sistema colonial que á la corona de España plugo darnos, es difícil aun sustraernos á la influencia de los principios políticos europeos; pareciéndonos extraña la jurisdiccion de magistrados que juzguen de las mismas leyes, cuando en todas las aulas se nos inculcaba la máxima de que el Juez debía juzgar, no de las leyes sino conforme á ellas. *Non de legibus sed secundum leges, judex judicare debet.*

Si se reflexiona detenidamente sobre este punto, se ve que el sistema contrario propio de las Repúblicas americanas, es la consecuencia precisa de una union federal perfectamente calculada. Hoy no tenemos como antiguamente un gobierno único que regía á todos los individuos que con razon recibían el nombre de súbditos; sino una multitud de gobiernos, que con existencia separada é independiente, poseen su propio cuerpo Legislativo; siendo imposible por lo mismo, considerar la Constitución que norma la marcha de veintiseis Estados libres, sino es como un tratado cuyas estipulaciones son igualmente obligatorias para gobernantes y gobernados. De aquí dimanar las innumera-

bles precauciones y eficaces medidas para mantenerla ilesa ó impedir cualquier violencia que se le pretenda irrogar ya por las legislaturas de los Estados, ya por el Congreso de la Union. Contándose entre aquellas el establecimiento de los tribunales de la Federacion (artículos desde el 90 hasta el 102.)

En efecto, la Suprema Corte de Justicia y los jueces que le están subordinados, tienen el estricto deber de fallar en un caso dado, sobre si una disposicion legislativa es ó no constitucional; y por consiguiente, si es ó no obligatoria para el individuo que rechaza su observancia. A semejanza de la de los Estados-Unidos del Norte, nuestra Constitución niega á las Legislaturas de los Estados el derecho de desentenderse de sus preceptos, considerando nula y sin efecto cualquiera innovacion que en este sentido pretendan hacer.

Cuya conformidad de instituciones supuesta, no es fuera del caso traer á colacion algun ejemplo del modo con que el poder judicial de aquel país ejerce sus atribuciones respecto de los demas poderes en los casos de su competencia. La Constitución americana ha reservado al Congreso la facultad de expedir leyes sobre el comercio, con el objeto de evitar conflictos entre los Estados. La Legislatura de Nueva-York por medio de un decreto, concedió el privilegio exclusivo de la navegacion por vapor, en las aguas del Estado, á Livingstone y á Fulton. En el pleito seguido en el año de 1824 por Gibbons contra Ogden, ese decreto fué declarado anticonstitucional por la Corte Suprema de Justicia; á pesar de que desde 1812 el Tribunal de apelacion (Court of Errors) de Nueva-York había dedido en cinco expedientes semejantes conforme á las pretensiones de las partes que sostenían la validez y constitucionalidad del privilegio, apoyándose en que la navegacion interior de cada Estado era privativo objeto de su jurisdiccion legislativa. Y á este propósito observa el Canciller Kent en sus Co-

mentarios, que ni en los tribunales del Estado ni en la Corte Suprema, se soñaría por un instante poner en duda el derecho que esta tenía para no hacer aprecio de una ley que pugnaba abiertamente con la Constitución.

Segun Story es indudable que la medida (standard) para apreciar é interpretar las leyes, es la Constitución; y siempre que haya oposicion, las leyes tienen que ceder el lugar á la Constitución.

En virtud de estas consideraciones, el Promotor fiscal pide se sirva ese Juzgado declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege á Don Hermenegildo Feliú, contra el decreto de la Legislatura del Estado que lo obliga al pago de la alcabala en la Aduana interior del mismo.

Querétaro, 12 de Febrero de 1873.—
Luis Castañeda.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Marzo 6 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Ramon O. Feliú como apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo Feliú, contra el decreto número 172 de la Legislatura de este Estado en la parte que establece el cobro de alcabalas; lo alegado por el promoviente en su escrito de queja, el informe rendido por la autoridad ejecutora que se vé á fojas 9 de este expediente; lo que expuso el Promotor al evacuar el traslado para decidir el punto sobre suspension del decreto reclamado; el auto en que este se suspendió; las diligencias en que sin rendirse pruebas renunció el actor el derecho de alegar; lo que el Fiscal alegó en 12 de Febrero último, fojas de la 14 á la 16; la citacion para sentencia con todo lo demas que verse debia.

Considerando: Que la existencia del hecho de estar establecidas las alcabalas en este Estado de Querétaro por el decreto citado, está suficientemente comprobada en estos autos, con el mismo informe del ciu-

TOMO IV.—PARTE II.

dadano vicegobernador que corresponde de la foja á la , en cuyo documento no solo se confiesa tal hecho, si no que aun se intenta defenderlo, cuando ademas es de toda notoriedad la promulgacion de dicho decreto y su rigurosa observancia en el Estado.

Considerando: que el artículo 124 de la Constitución general de la República, bajo ningun concepto puede considerarse como una mera promesa hecha á la Nacion, tanto porque los términos de dicho artículo son imperativos para que las alcabalas cesaran en todo el territorio mexicano á dia fijo, extendiendose aun á las aduanas interiores, como porque toda decision constitucional se consigna para ser observada por los delegados del poder público, y por todos los ciudadanos que deben obedecerla, no cabiendo por tanto en esa Constitución, promesa de ninguna clase.

Considerando: que estando vigente ese precepto Constitucional, ninguna autoridad puede ser competente para decretar el impuesto que tal precepto extingue, ni menos para exigirlo, y hacer que se recaude ni por sí ni por sus agentes, de donde resulta que los que así procedan, proceden sin duda con notoria incompetencia, que es el preciso caso de la garantía del artículo 16 de la Constitución federal. Por tales razones, y las que vierte el promotor en el alegato que se citó en virtud del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: Que la Justicia federal ampara y protege al C. Ramon O. Feliú en representacion de su padre D. Hermenegildo, contra el decreto número 172 que establece en el Estado el cobro de alcabalas. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito, tercer suplente, Lic. Francisco Villaseñor.—Doy fé.—*Francisco Villaseñor.*—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 19 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Ramon O. Feliú, como apoderado del señor su padre, D. Hermenegildo Feliú, contra el decreto número 172 de la Legislatura de ese Estado en la parte que establece el cobro de alcabalas sobre los efectos del país que se introduzcan al referido Estado de Querétaro, alegando: que con esa providencia se violan en la persona del referido D. Hermenegildo Feliú los artículos 16 y 124 de la Constitución general de la República; lo primero, por no ser autoridad legítima el Administrador de rentas, ni poder fundar ni motivar el acto; y lo segundo, porque el citado artículo 124, dispuso que para el 12 de Junio de 1858, quedaran obolidas las alcabalas y aduanas interiores en la República, y por lo mismo el cobro de ellas, según el quejoso, es contrario á tal artículo; y considerando, respecto del punto relativo á la ilegitimidad del Administrador de rentas: que Feliú hace consistir en la de la autoridad que lo nombró Administrador, y acerca de ella no ha dado prueba alguna. Considerando, respecto de lo demás: que en tanto asegura Feliú que dicho Administrador no puede fundar y motivar su auto, en cuanto reputa contrario á la Constitución el cobro de alcabala, lo cual no es exacto, porque el artículo 124 de la Constitución federal, que prescribió la abolición de las alcabalas y aduanas interiores de la República reemplazando las alcabalas y la expedición de la ley á leyes indispensables para hacer efectiva la prevención constitucional, la cual en consecuencia no puede considerarse violada mientras no se llenen esas condiciones; por lo expuesto, se decreta: Que se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Querétaro en 6 de Marzo próximo pasado, que otorga el amparo, y se declara: Que la Justicia de la Unión no am-

para ni protege á Don Ramon Feliú en representación de su padre D. Hermenegildo, contra el cumplimiento y ejecución del decreto número 172, expedido por el Congreso del Estado de Querétaro y publicado en 30 de Diciembre de 1872.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 27 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Loreto Olivares, contra su consignación al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en 6 del presente compareció Anastasio Dominguez, casado, mayor de edad, y de esta vecindad, en representación de su sobrino Loreto Olivares, quejándose de que el sábado 30 de Agosto último, lo encontraron corrigiendo á su esposa con una correa, sin hacerle daño alguno, por lo que lo condujeron á la cárcel sin que se le formara causa por sevicia; y que el jueves 5 del presente, el C. Gefe político de esta Capital lo remitió á Guadalupe, donde se le dió de alta en el piqueto del batallón número 24, contra su consen-